



Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Expte. N°: **984/2008**

Autos: **“SACCHI JUAN CARLOS Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL - CAJA RET. JUB. Y PENS. DE LA P.F. s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG”**

Sentencia Interlocutoria

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

**VISTO:**

Que llegan las actuaciones a sentencia con motivo de lo resuelto por este Tribunal en el expediente n° 984/2008 Recurso Queja N° 1 - SACCHI JUAN CARLOS Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL - CAJA RET. JUB. Y PENS. DE LA P.F. s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG, que mediante Sentencia Interlocutoria de fecha 24 de junio de 2021 declara mal denegado el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del día 14 de febrero de 2020 que desestima la regulación de honorarios pretendida por el Dr. Albarracín.

**Y CONSIDERANDO:**

La resolución criticada -de fecha 14 de febrero de 2020- expresamente dispone: “... **no existen sumas líquidas para calcular el porcentaje regulado en autos en concepto de honorarios**, cabe citar lo sostenido por la jurisprudencia en cuanto a que “cuando un profesional realiza una tarea completamente inconducente o inoficiosa no puede pretender que se le regulen honorarios (...)” (C.N.CIV., Sala E, junio 4-1981. E.D. 94-758) y que “...La ley 21.839 no considera de manera particular el caso de los escritos inoficiosos, pero debe ser contemplado dentro de los principios de orden general contenidos en su art. 6, ya que carece de sentido que aquella labor que ha sido considerada manifiestamente no idónea para cumplir con su finalidad propia (...) pueda devengar honorarios”. (in re “Hillel, V. c. El Sauzal S.A.”, C.N.CIV., Sala D, junio 11-1979). Asimismo, abona lo expuesto el hecho que de las constancias de autos surge que, la demandada, a cuya parte se han impuesto las costas, nada debe por el reclamo interpuesto. En virtud de lo anterior, hágase saber al letrado de la parte actora, que **no corresponde regulación de honorarios a su favor.**” (el resaltado nos pertenece).

El Dr. Pedro Miguel Albarracín se agravia de lo allí decidido. Manifiesta que pese a la existencia de una sentencia que dispone una condena en costas y regulación de honorarios a su favor, la cual se encuentra firme y consentida, el “a quo” estima no corresponde fijar emolumentos, afectando los derechos constitucionales de propiedad y de defensa en juicio (arts.17 y 18 de la CN) y el principio de cosa juzgada.

De las constancias del expediente físico surge que esta Sala en la Sentencia Definitiva de fecha 1 de abril de 2014 resolvió: “1) Revocar la sentencia





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

recurrida de acuerdo a los lineamientos trazados por la CSJN en el fallo “Salas Pedro Ángel y otros c/Estado Nacional—Ministerio de Defensa s/Amparo” reconociendo el carácter remunerativo y bonificable de los decretos en cuestión, ....3) **Imponer las costas a la demandada;** 4) **Regular los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora en el 8 % de la liquidación definitiva en autos (conf.arts. 6, 7, 8 y cctes. Ley 21839 mod. por la ley 24432 y art.279 CPCCN). Regular los de Alzada en el 25 % de lo fijado en la instancia anterior...”.**

Si bien ello se encuentra consentido por las partes, ante la circunstancia particular de no contar con un monto que sirva de base regulatoria, en tanto las liquidaciones de los actores resultaron negativas (hecho no discutido en autos), resulta de imposible cumplimiento fijar los honorarios del Dr. Albarracín en los términos porcentuales establecidos en el decisorio precedentemente citado.

Ahora bien, frente a tal escenario, cobra relevancia el carácter alimentario que tienen los emolumentos y que la actividad profesional se presume de carácter oneroso de acuerdo a los expresos términos del art. 3° de la ley 21.839, aplicable al caso en tanto la totalidad de las tareas se realizaron bajo su vigencia.

A mayor abundamiento, cabe señalar que ninguna actividad se presume gratuita. En este sentido el art. 1322 del C.C.C.N. establece que “El mandato se presume oneroso. A falta de acuerdo sobre la retribución, la remuneración es la que establecen las disposiciones legales o reglamentarias aplicables, o el uso. A falta de ambos, debe ser determinada por el juez”.

Asimismo, nuestro más Alto Tribunal tiene dicho que las regulaciones de honorarios no dependen exclusivamente del monto del litigio o de las escalas pertinentes, sino de todo un conjunto de pautas que deben ser evaluadas por los jueces con discreción y prudencia (sentencia de fecha 20 de marzo de 2007 en autos “SAIN, JUAN C. C/TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. Y OTRO”).

La propia ley arancelaria dispone que, aun cuando la cuestión es susceptible de apreciación pecuniaria, el monto del asunto no es el único criterio que debe tenerse en cuenta para la regulación de los honorarios profesionales, sino que a él se agregan la extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada (ver art. 6 de la ley 21.839 y actualmente art.16 inciso b de la ley 27.423).

En consecuencia, de la lectura integral de la normativa aplicable surge que el representante legal tiene derecho a una justa retribución, y para ello los jueces deben evaluar la naturaleza y complejidad del asunto, la índole, extensión, calidad y eficacia de los trabajos realizados, de manera de arribar a una solución equitativa y mesurada acorde con las circunstancias particulares de cada caso.





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

En este sentido se ha expedido recientemente este Tribunal en los autos: “FRAMMARTINO NORMA BEATRIZ c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS” expediente n° 63999/2010, Sentencia Interlocutoria de fecha 7 de marzo de 2024, a cuyos fundamentos nos remitimos en honor a la brevedad.

Por tanto, corresponde revocar la resolución apelada y devolver las actuaciones al juzgado de origen a fin de que se proceda a regular los aranceles profesionales pertenecientes al Dr. Albarracín por las labores desarrolladas en el presente proceso, teniendo en cuenta a tal fin las pautas generales del art. 6° de la ley 21.839 modificada por ley 24.432.

Por último, en relación a las costas, se revoca lo dispuesto por el “a quo” debiéndose estar a los términos de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, que las impuso a la demandada.

Por lo expuesto, el Tribunal **RESUELVE**: 1°) Revocar la resolución apelada; 2°) Devolver las actuaciones al juzgado de origen a fin de que proceda a regular los emolumentos correspondientes al Dr. Pedro Miguel Albarracín T° 27 F° 429 en los términos precedentemente señalados.

Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

NORA CARMEN DORADO  
Juez de Cámara

JUAN A. FANTINI ALBARENQUE  
Juez de Cámara

WALTER F. CARNOTA  
Juez de Cámara Subrogante

Ante mí:

MARINA MALVA D'ONOFRIO  
Secretaria de Cámara

KPB

